DESCONCIERTO FELIPISTA Y RESPONSABILIDAD CIUDADANA

EL MUNDO. 12 DICIEMBRE 1994

JOSE AUMENTE

CONVIENE recordarlo. Hubo un periodo iniciado al final de 1982, en que el poder felipista brilló con su omnipresencia, casi ocupándolo todo, desde las Cajas de Ahorro al Parlamento, desde los ayuntamientos a las más altas instancias del Poder Judicial. Los poderes fácticos (Banca, Ejército, Iglesia) fueron desactivados. También la sociedad civil era desactivada, dejando a los ciudadanos en su minoría de edad, y sólo convocados periódicamente a dejarse manipular en su voto por el simplismo electoralista que encabezaba el clan de Alfonso Guerra. Además, se utilizaba el argumento, entonces incontestable, de una democracia consolidada, gracias al señuelo de una oligocracia de partidos políticos.

Después de haber revalidado la mayoría absoluta dos veces más -en el 86 y el 89- se consideraron dueños del país, perdonados de todos los posibles pecados, -impunidad absoluta-, y se lanzaron a la orgía de los negocios fáciles, las comisiones, los despilfarros sin control. Todo estaba permitido, porque los votos se lo consentían todo. Estos votos le indicaban que «iban por el buen camino», porque la tarta era inmensa, y todos los españoles, en mayor o menor medida, podrían participar. Era la época dorada de los pícaros y de los cómplices. A nadie se le tiene mejor cogido, ni más sumisamente fiel, que aquél a quien se le ha facilitado o beneficiado con alguna «irregularidad», sea el PER, sean los fondos reservados.

El primer punto de inflexión se produjo con la dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra, a raíz del descubrimiento publicado, de lo que por otra parte era conocido del pueblo llano sevillano: el enriquecimiento rápido de Juan Guerra, al conjuro mágico del solo nombre de su todopoderoso hermano. Desde entonces, la curva ascendente se quebró, y comenzó un largo e irreversible descenso. Se pasó de «lo público», a lo «publicado», salto cualitativo que no supieron entender. Hoy, el desconcierto es manifiesto. Y se pone a prueba todos los días, en cada uno de los frentes que el poder felipista tiene abiertos. Me voy a referir concretamente a tres:

a) El frente de la cohesión del propio grupo felipista, roto al quebrarse el tándem Felipe-Guerra que le mantenía estrechamente unido. Desde aquella hendidura, ni la cohesión interna se ha vuelto a restablecer, ni la ruptura se ha oficializado. Se mantiene un difícil equilibrio, del que es una prueba esa lucha más o menos abierta entre «renovadores» y «guerristas», siempre atemperada por el usufructo de un poder que pueden perder en caso de consumarse. Así pues, rompen y no rompen, no pero sí, mantienen el equilibrio «desequilibradamente». Por una parte, en la actual fase de desconcierto, el propio Felipe González vuelve a la vieja táctica guerrista -su discurso en Cáceres fue significativo en este sentido- y recobra el simplismo fácil de la izquierda estalinista y la derecha cavernícola, utiliza los fantasmas de nuestro reciente pasado histórico, y crispa la vida política española «metiendo miedo» entre sus fieles y transmitiéndolo también al resto de la sociedad. Es decir recobra los viejos tics guerristas, pretende hacerlos suyos, y con ello recuperar la confianza de sus fieles. Por otra parte, la carta de solidaridad con Guillermo Galeote, confirma su desconcierto ante su difícil papel simultáneo de secretario general de un partido inculpado por Filesa, y el de presidente de un Gobierno que debe garantizar, ante todo, la independencia del poder judicial. Posiblemente no ha tenido otra opción que firmarla -un gol que le han metido- para mantener la cohesión de la propia secta socialista. Pero ello revela el desconcierto provocado por una situación que ya no consigue dominar.

b) La pérdida de la mayoría absoluta no han sabido aceptarla con la suficiente coherencia, y su oscuro «pacto» con CiU y PNV es tan inconcreto, dúctil, tan «en el aire», que cada día le origina nuevos sobresaltos. Cada ministro anuncia -al parecer por su cuenta- nuevas iniciativas, desde la Ley del Aborto a la supresión o el reforzamiento de los gobernadores civiles, y a las pocas horas es contestado por sus socios vascos y catalanes. La pobre imagen de desconcierto, de falta de criterios, de no saber el terreno que pisan, es francamente desoladora. Siempre viene

el «tío Jordi con la rebaja», y tienen que tragarse todas las declaraciones. Y es que la inestabilidad del poder es tal, que no han sabido o no han podido concretarla. No ya un Gobierno de coalición, ni un pacto de legislatura, ni siquiera se han atrevido a legalizarla en una cuestión de confianza. Todo está tan confuso y diluido, expuesto a las conveniencias de los catalanes en cada momento, que hablar de la gobernabilidad asegurada suena a «tomadura de pelo» para cualquier ciudadano normal. Sólo el tema de los gobernadores civiles sirve para constatar lo patético de una situación.

c) Y, por último, también están desconcertados ante la gran cascada de casos de corrupción, que se han sucedido ininterrumpidamente desde hace varios años. Desde entonces, nunca han sabido reaccionar adecuadamente; nunca con transparencia y decisión, aunque las tácticas empleadas han sido diversas. Primero, negar lo evidente, en lo que los felipistas han sido maestros; después, obstruir la labor investigadora, esperar a que escampe y, en última instancia, recurrir a los «chivos expiatorios». Lo que no quieren reconocer es que todas estas fórmulas están ya agotadas, tuvieron su vigencia, y hoy ya no sirven. El problema para los felipistas es que no logran recuperarse de un caso, cuando ya tienen otro encima. Con el agravante de que no existe uno sólo que pueda afirmarse que se ha cerrado, sino que todos siguen más o menos latentes. Sólo les favorece la inconcebible lentitud de la Justicia, que necesitó varios años para decidir que el nombramiento de Eligio Hernández era ilegal, pero mientras tanto tuvimos que tragárnoslo como fiscal general, y el Gobierno utilizarlo para sus propios fines encubridores. Algo verdaderamente bochornoso e intolerable en un Estado de Derecho. Lo cierto es que todos los «casos» siguen pendientes, todos cuelgan como espadas de Damocles sobre las cabezas del felipismo dominante, y esto es obligado que origine mucha desazón y bastante desconcierto.

Cabe preguntarse ahora cómo ha sido posible que lleguemos a esta situación, que la sociedad civil no haya reaccionado a tiempo, y no se dé cuenta todavía de que está dirigida actualmente por unos desconcertados gobernantes. Y cómo ha sido posible que haya colaborado a sostenerlos en el poder, en sucesivas votaciones, nada menos ya que en cuatro legislaturas. Me voy a permitir a este respecto, unas duras palabras de García-Trevijano: «El español tiene hoy menos dignidad que con Franco. Los que hoy votan carecen de dignidad, porque están votando a los que mienten, a los que se corrompen, a los que engañan. Y pudiendo no votarlos, simplemente absteniéndose, y sin embargo los votan». (La Tribuna de Córdoba, 4.XII.94). Para García-Trevijano, pues, bajo Franco podía haber humillación, pero no indignidad ciudadana, como ahora existe. Antes no había otra opción que obedecer, ahora se consiente voluntariamente. Y aunque posiblemente sean exageradas y un tanto simplistas estas valoraciones, lo cierto es que el máximo de responsabilidades por la situación presente recae sobre los ciudadanos españoles, por dejarse manipular tan ingenuamente a la hora de depositar el voto.

Confiemos en que las próximas elecciones generales -coincidiendo quizás con las municipales- marquen el nuevo rumbo de la sociedad española.

JOSE AUMENTE es médico y escritor